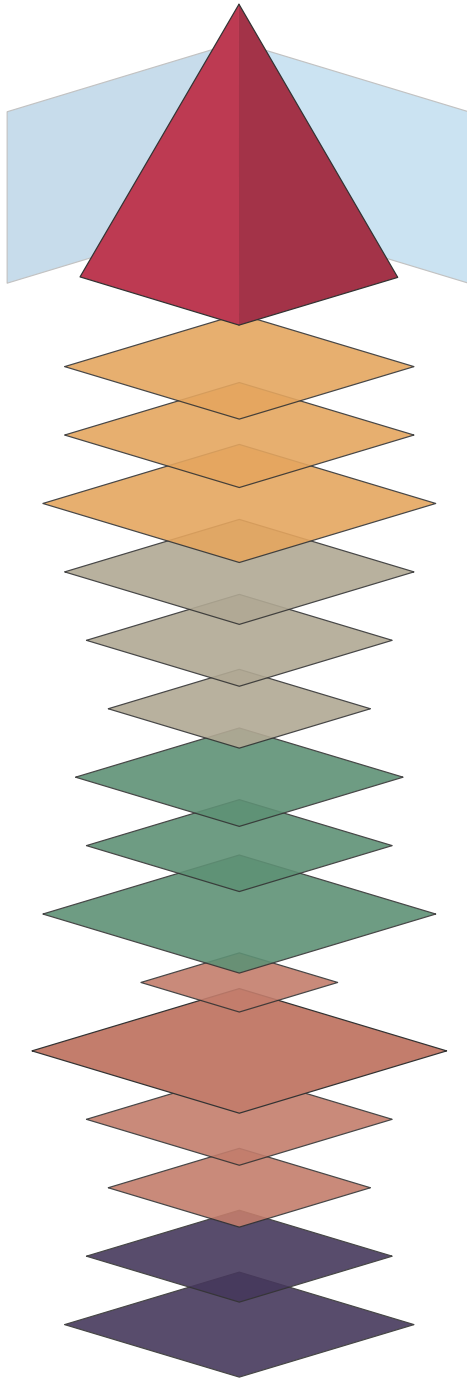
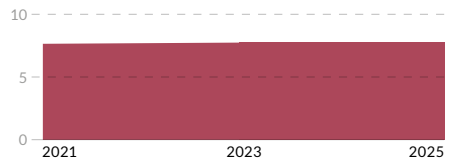


 **COLOMBIA**



 **7.82**  $\nearrow 0.07$   
**PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD**

2.º de 193 países -  
1.º de 35 países americanos -  
1.º de 12 países de América del Sur -



 **MERCADOS CRIMINALES** **7.43**  $\nearrow 0.13$

TRATA DE PERSONAS	8.00	0.00
TRÁFICO DE PERSONAS	8.00	$\nearrow 0.50$
EXTORSIÓN Y COBROS ILEGALES POR PROTECCIÓN	9.00	$\nearrow 0.50$
TRÁFICO DE ARMAS	8.00	0.00
COMERCIO DE PRODUCTOS FALSIFICADOS	7.00	$\searrow 0.50$
COMERCIO ILÍCITO DE BIENES DE CONSUMO SUJETOS A IMPUESTOS ESPECIALES	6.00	$\nearrow 1.50$
DELITOS CONTRA LA FLORA	7.50	$\nearrow 0.50$
DELITOS CONTRA LA FAUNA	7.00	0.00
DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NO RENOVABLES	9.00	0.00
COMERCIO DE HEROÍNA	4.50	$\searrow 0.50$
COMERCIO DE COCAÍNA	9.50	0.00
COMERCIO DE CANNABIS	7.00	0.00
COMERCIO DE DROGAS SINTÉTICAS	6.00	0.00
DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA	7.00	0.00
DELITOS FINANCIEROS	8.00	0.00

 **ACTORES CRIMINALES** **8.20** 0.00

GRUPOS DE TIPO MAFIOSO	9.50	0.00
REDES CRIMINALES	9.50	0.00
ACTORES INTEGRADOS EN EL ESTADO	7.50	0.00
ACTORES EXTRANJEROS	7.50	0.00
ACTORES DEL SECTOR PRIVADO	7.00	0.00



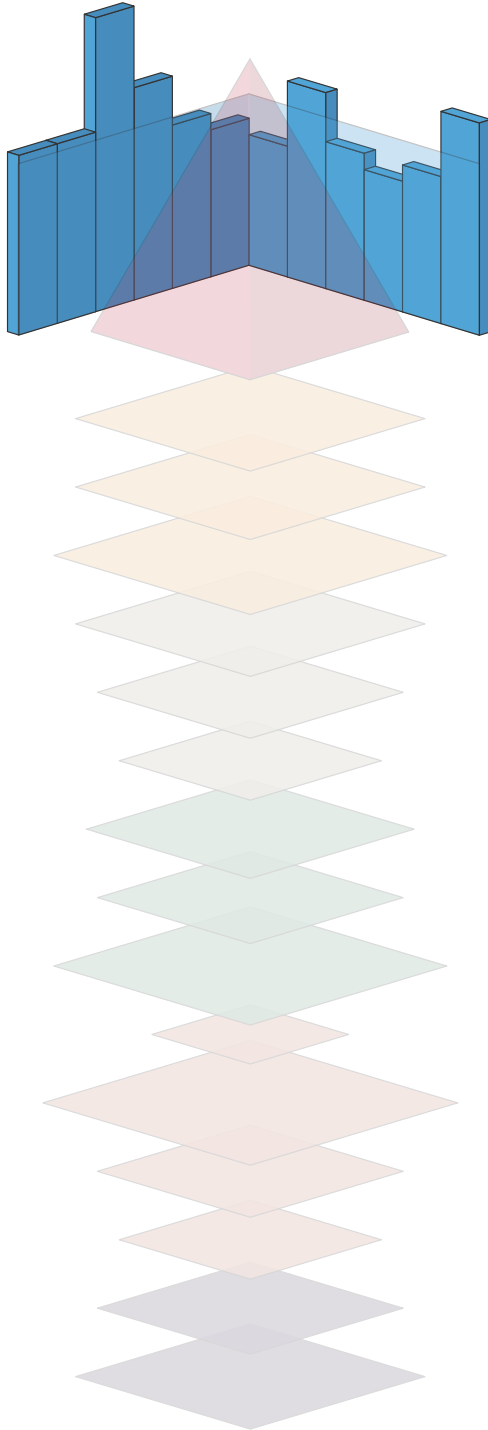
Este proyecto ha sido financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos



Funded by the European Union

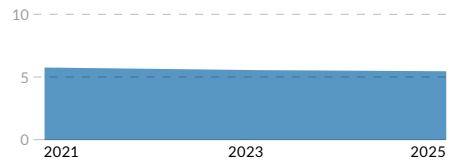
ENACT es un programa financiado por la Unión Europea e implementado por el Institute for Security Studies e INTERPOL, en asociación con Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

 **COLOMBIA**



 **5.46**  $\searrow 0.17$   
**PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA**

56.º de 193 países  $\searrow 6$   
10.º de 35 países americanos  $\searrow 3$   
4.º de 12 países de América del Sur -



LIDERAZGO POLÍTICO Y GOBERNANZA	<b>5.50</b> $\searrow 0.50$
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS	<b>5.50</b> 0.00
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	<b>9.00</b> 0.00
POLÍTICAS Y LEYES NACIONALES	<b>6.50</b> 0.00
SISTEMA JUDICIAL Y DETENCIÓN	<b>5.00</b> $\searrow 0.50$
CUERPOS DE SEGURIDAD	<b>4.50</b> $\searrow 0.50$
INTEGRIDAD TERRITORIAL	<b>4.00</b> $\searrow 0.50$
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO	<b>6.00</b> 0.00
CAPACIDAD DE REGULACIÓN ECONÓMICA	<b>4.50</b> $\searrow 0.50$
APOYO A VÍCTIMAS Y TESTIGOS	<b>4.00</b> $\nearrow 0.50$
PREVENCIÓN	<b>4.50</b> 0.00
ACTORES NO ESTATALES	<b>6.50</b> 0.00



Este proyecto ha sido financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos



Funded by the European Union

ENACT es un programa financiado por la Unión Europea e implementado por el Institute for Security Studies e INTERPOL, en asociación con Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

# CRIMINALIDAD

## MERCADOS CRIMINALES

### PERSONAS

Colombia sigue siendo un centro importante para la trata de personas, ya que es un país de origen, tránsito y destino. Algunas organizaciones criminales, como el Clan del Golfo y el Tren de Aragua de Venezuela, manejan amplias redes de trata y explotan a personas vulnerables para hacer trabajos forzados y para destinarlas a la explotación sexual y a actividades delictivas. Entre las víctimas se encuentran ciudadanos colombianos, migrantes venezolanos y personas traficadas procedentes de otros países sudamericanos. Los traficantes recurren al engaño, la coacción y la violencia y suelen utilizar las redes sociales para atraer a sus víctimas con falsas promesas. Los sectores de la hostelería, la agricultura y la minería sirven de tapadera para estas operaciones y el trabajo forzoso es frecuente en las industrias del café, la fresa, la palma, el carbón, el oro y las esmeraldas. El reclutamiento forzoso de niños por parte de grupos armados se ha intensificado y en los últimos años ha habido un aumento considerable de informes sobre el reclutamiento infantil. Las autoridades rescataron a cientos de niños de organizaciones criminales en el 2024, pero es probable que las cifras reales sean mucho más elevadas.

El tráfico de personas se ha convertido en uno de los mercados criminales más extendidos del país, con el Tapón del Darién como un corredor de tránsito clave. El Clan del Golfo ejerce un control casi total sobre esta región, cobra tarifas elevadas y obliga a algunos migrantes a transportar drogas como forma de pago. El Tren de Aragua y otros actores criminales extranjeros han ampliado sus operaciones, especialmente a lo largo de la frontera entre Venezuela y Colombia. Los funcionarios corruptos y los actores del sector privado de la industria del transporte y la de la hostelería facilitan estas redes de tráfico ilícito. Los migrantes pagan distintas tarifas para atravesar Colombia, según la ruta, y a muchos los extorsionan cuando llegan. Algunos grupos delictivos utilizan el tráfico de personas como distracción para el tráfico de drogas y recurren a las mismas rutas marítimas y terrestres. Están surgiendo corredores alternativos de tráfico ilícito, especialmente a través de Medellín, Anorí, Montería y Necoclí.

La extorsión es una actividad delictiva muy extendida en Colombia, que afecta a empresas de todos los tamaños, desde pequeños vendedores hasta corporaciones multinacionales. Dominan el mercado algunos grupos, como el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que aprovechan el miedo y la violencia para obtener pagos. Las redes de tipo mafioso extorsionan a empresas del sector minero, el ganadero, el de la construcción, el minorista y otros. En las zonas urbanas, las pequeñas empresas y los

vendedores ambulantes suelen ser blanco de organizaciones criminales que ofrecen cierto grado de «protección» a cambio de los pagos. En las regiones rurales, donde la extorsión está profundamente arraigada, algunas comunidades la consideran un costo inevitable que hay que pagar para hacer negocios. Casi la mitad de los casos de extorsión se orquestan a distancia, a menudo desde el interior de las cárceles. Los actores criminales utilizan mensajes cifrados y métodos de pago digitales para no ser detectados. Los intentos del Gobierno por frenar la extorsión bloqueando las señales móviles en las prisiones han fracasado, en gran medida. Se estima que solo el mercado de la extorsión en Medellín mueve millones al año, lo que pone de relieve la rentabilidad de este delito.

### TRÁFICO

Colombia tiene un mercado de tráfico de armas muy desarrollado, con armas que llegan de Estados Unidos, de América Central y de sus vecinos: Venezuela y Brasil. Algunas ciudades portuarias, como Buenaventura, sirven como lugares de tránsito claves. Los grupos de tipo mafioso, las bandas locales y los actores integrados en el Estado participan en el tráfico de armas. Hay funcionarios corruptos que facilitan el movimiento de armas de fuego ilícitas y algunas figuras de alto nivel están acusadas de suministrar directamente a los grupos criminales. El uso de drones y artefactos explosivos por parte de las facciones guerrilleras se ha intensificado, lo que refleja un cambio en las tácticas de guerra y, por extensión, en la adquisición de armas ilícitas. Además de las ventas, el alquiler de armas ligeras para actividades delictivas se ha vuelto cada vez más común en los últimos años. La amplia disponibilidad de armas de fuego ha tenido un impacto directo en la tasa de homicidios de Colombia, ya que la mayoría de los asesinatos se cometen con armas de fuego.

Los productos falsificados son un problema muy extendido y hay redes criminales que trafican con medicamentos, productos electrónicos y artículos de lujo falsificados. Muchos de estos productos proceden de China y del Sudeste Asiático y se distribuyen a través de mercados informales y plataformas en línea. En Colombia, los productos falsificados se venden abiertamente en muchos lugares, desde los mercados San Andresito de las grandes ciudades hasta las calles, las farmacias y los centros comerciales de ciudades más pequeñas, a menudo a la vista de las autoridades, que carecen de la capacidad o de la voluntad para encarar el problema. Las organizaciones criminales también utilizan el comercio de productos falsificados para lavar dinero. A pesar de los intentos de hacer cumplir la ley y de las importantes incautaciones anuales, que registraron un notable aumento durante el período que abarca el informe, los productos falsificados siguen estando ampliamente disponibles. El comercio ilícito de alcohol también plantea riesgos para la

salud pública, ya que se han denunciado casos de intoxicación con bebidas alcohólicas falsificadas. La intervención de los cuerpos de seguridad ha dado lugar a la detención de figuras claves involucradas en este comercio, pero las redes criminales siguen adaptándose y ampliando sus operaciones. Además de ser un país de destino, Colombia también actúa como un país de origen de los artículos falsificados, que entran en los mercados vecinos.

El comercio ilícito de bienes de consumo sujetos a impuestos especiales, en particular los cigarrillos y el alcohol, se ha expandido significativamente. Los artículos de contrabando, sobre todo los cigarrillos, se introducen principalmente en Colombia desde países como Uruguay, Corea del Sur, los Emiratos Árabes Unidos, China e India. Maicao es un centro de distribución importante. En algunas regiones, los cigarrillos ilícitos representan la mayor parte de la cuota de mercado. Los grupos de tipo mafioso y las organizaciones más pequeñas explotan el comercio ilícito de cigarrillos y alcohol para lavar dinero y los beneficios procedentes del contrabando. El comercio es posible gracias a la corrupción de los funcionarios de seguridad, especialmente en las aduanas y cerca de los puntos de venta, y de los actores del sector privado en puertos y mercados. Al parecer, también participan grupos extranjeros, como el Tren de Aragua, que coaccionan a los vendedores de algunas ciudades para que vendan productos de contrabando.

## MEDIOAMBIENTE

Los delitos contra la flora en Colombia, en particular la tala ilegal, están muy extendidos y profundamente arraigados. Se estima que casi la mitad de la madera que circula es de origen ilícito, gran parte de la cual se blanquea mediante permisos falsificados o la connivencia de funcionarios medioambientales corruptos. Las organizaciones criminales coordinan la extracción, el transporte y el blanqueo de la madera, a menudo en combinación con otras actividades ilegales, como el acaparamiento de tierras y la producción de drogas. El comercio abastece tanto a los mercados nacionales como a la demanda internacional, especialmente de China y Asia Occidental. Aunque en los últimos años se ha reducido la deforestación, gran parte de la mejora se atribuye a las treguas temporales de los grupos armados durante las negociaciones, más que a la aplicación de la ley por parte del Estado. La corrupción de las autoridades medioambientales regionales perpetúa la impunidad.

La rica biodiversidad de Colombia y la escasa aplicación de las leyes de protección ambiental facilitan los delitos contra la fauna. El país funciona principalmente como proveedor de animales exóticos y se trafican especies destinadas a la moda, la gastronomía, la medicina tradicional y el comercio de mascotas. Las redes criminales se dedican al tráfico de especies silvestres cuando surge la oportunidad, a menudo con la colaboración de los funcionarios de aduanas. En general, el comercio tiende a ser oportunista, más que a estar muy organizado. Las detenciones de alto nivel y la cooperación

internacional han intensificado los esfuerzos por hacer cumplir la ley, pero el mercado persiste, debido a los elevados beneficios que genera en los países de destino, como China y Estados Unidos. El comercio ilegal de especies silvestres se entrecruza con otros delitos ambientales y con los delitos financieros. Algunas especies, como los tiburones, los monos y las ranas, son objeto de exportación y en ocasiones hay ciudadanos extranjeros involucrados en su tráfico.

Los delitos contra los recursos no renovables, en particular la extracción ilegal de oro, constituyen un mercado ilícito muy extendido y perjudicial. A la minería se dedican sobre todo las organizaciones criminales y los pequeños actores independientes que operan sin temor a ser procesados. La minería ilegal afecta actualmente a la mayoría de las zonas mineras de Colombia y más de la mitad se lleva a cabo en zonas protegidas. Los grupos armados obtienen beneficios de las operaciones mineras legales o participan directamente en la extracción ilegal, que a menudo utilizan para blanquear las ganancias del tráfico de drogas. Las técnicas mineras causan un daño medioambiental considerable, que incluye la deforestación, la contaminación de los ríos y la pérdida de biodiversidad. El uso de mercurio, especialmente en los territorios afrocolombianos, ha tenido consecuencias devastadoras para las comunidades locales. El Gobierno colombiano ha reconocido la gravedad del problema y tiene previsto desplegar a miles de militares, pero la corrupción arraigada y la alta rentabilidad siguen alimentando la expansión de este mercado.

## DROGAS

Colombia sigue siendo el principal productor mundial de cocaína y la producción continúa expandiéndose, a pesar de las fluctuaciones de los precios de la coca y los esfuerzos de los cuerpos de seguridad. El comercio de la cocaína se maneja a través de una cadena de suministro sumamente estructurada, que comienza con el cultivo de la hoja de coca y culmina en las redes internacionales de tráfico. El cultivo se concentra en zonas rurales propensas a los conflictos, donde los grupos armados proporcionan protección a los agricultores a cambio de su lealtad. La caída de los precios de la hoja de coca ha ocasionado dificultades económicas a muchos pequeños agricultores, mientras que las operaciones delictivas a gran escala casi no se han visto afectadas. La cocaína colombiana se transporta a través de las rutas tradicionales hacia Estados Unidos y Europa y hacia nuevos mercados en Asia, África y Oceanía. Al parecer, ha habido una mayor diversificación de los métodos de contrabando, como el uso de semisumergibles, drones y envíos ocultos en exportaciones comerciales. Algunas organizaciones criminales, como el Clan del Golfo, la guerrilla del ELN y los disidentes de las FARC, están muy involucradas en el cultivo, la producción y la exportación de la cocaína y controlan los laboratorios de procesamiento y las rutas del tráfico. Los grupos más pequeños se encargan de algunas partes de la cadena de suministro y del microtráfico en las ciudades. Los actores extranjeros, como los cárteles mexicanos y el Tren

de Aragua de Venezuela, han ampliado su presencia en los últimos años. La corrupción de las fuerzas de seguridad y de los funcionarios públicos facilita el comercio. El sector privado también contribuye, ya que algunas empresas ayudan a exportar drogas ocultas en envíos legales o blanquean las ganancias mediante programas financieros.

El comercio de heroína, que siempre ha sido importante en Colombia, ha disminuido, debido a la creciente presencia de opioides sintéticos, como el fentanilo. Sin embargo, se sigue cultivando la adormidera, especialmente en las regiones montañosas, donde las organizaciones criminales continúan con la producción. Los países vecinos, como Ecuador y Estados Unidos, siguen siendo los principales destinos de la heroína colombiana, pero la disminución de la demanda y el aumento de las incautaciones de los cuerpos de seguridad han debilitado este mercado. La mayor presión de los cuerpos de seguridad ha obligado a los traficantes a adoptar métodos de contrabando más discretos, como el microtráfico y el uso de mensajeros humanos. Dado que el comercio de la heroína es menos rentable que el de la cocaína, algunos grupos delictivos se han visto obligados a diversificarse hacia el comercio de drogas sintéticas y la extracción ilícita de oro.

El mercado de las drogas sintéticas, especialmente el 2CB («cocaína rosa»), ha crecido rápidamente, con Medellín como centro clave de producción y de distribución. Las organizaciones criminales producen drogas sintéticas a nivel local e importan precursores químicos para mantener el suministro. La demanda de drogas sintéticas está aumentando, especialmente entre los consumidores urbanos más jóvenes y en los entornos de ocio nocturno. Las drogas sintéticas se suelen vender en redes a pequeña escala, a menudo camufladas como otras sustancias, para que no las detecten. El cannabis se sigue cultivando mucho, especialmente en Cauca, y se exportan variedades de alta potencia a los mercados regionales. Gracias al marco jurídico difuso del cannabis, los actores ilícitos han podido aprovechar las lagunas legales, especialmente en las zonas donde apenas se aplica la normativa. Las organizaciones criminales controlan partes importantes de la cadena de suministro de cannabis, aprovechando las antiguas rutas de contrabando para transportar variedades de alta potencia a nivel internacional. La variedad «creepy», conocida por su potencia, es muy codiciada en mercados como Brasil y Chile. Mientras que los grupos de tipo mafioso, como el Clan del Golfo, las guerrillas del ELN y los disidentes de las FARC, se dedican a la distribución local e internacional del cannabis, su cultivo y su producción están en manos de las comunidades locales. La violencia es omnipresente en este mercado. Las organizaciones criminales ejercen un control violento sobre las zonas en las que operan y atacan a las comunidades locales, a las organizaciones rivales, a las fuerzas de seguridad y a los representantes del Estado.

## DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA

Los delitos dependientes de la cibernética han aumentado en Colombia y en los últimos años se han registrado millones de intentos de ciberataques. Los delincuentes se han dedicado al ransomware, el robo de datos y el uso de software malicioso. Los ataques de ransomware son muy frecuentes y detrás suele haber actores extranjeros. No obstante, se observa que los grupos locales están cada vez más involucrados en el ransomware y los delitos dependientes de la cibernética en general. Las organizaciones criminales, como el Clan del Golfo, han incorporado los delitos cibernéticos a sus operaciones y atacan a las empresas y a las instituciones estatales. Los ataques se dirigen principalmente contra empresas privadas, instituciones públicas y el sector sanitario y la mayoría se concentran en Bogotá. Colombia es uno de los países latinoamericanos con mayor riesgo de sufrir ataques de ransomware. Los cuerpos de seguridad carecen de los recursos necesarios para luchar con eficacia contra las redes criminales y sus marcos jurídicos obsoletos dificultan las acciones judiciales.

## DELITOS FINANCIEROS

Colombia se enfrenta a delitos financieros persistentes y la evasión fiscal y la corrupción debilitan la economía formal. La evasión fiscal está muy extendida, debido, en gran medida, al alto grado de informalidad, a la ineficacia de los mecanismos de recaudación y a la corrupción de las instituciones de supervisión financiera. Se suele explotar al sector financiero formal para que encubra las tramas de evasión fiscal y los delincuentes aprovechan las empresas ficticias y las inversiones inmobiliarias para mover fondos ilícitos. Los delitos financieros propiciados por la cibernética han aumentado en los últimos años, lo que agrava las vulnerabilidades existentes. La cantidad de víctimas de fraudes financieros también ha aumentado significativamente y Colombia es uno de los países peor situados en las evaluaciones de seguridad contra el fraude financiero. El asesinato en el 2024 del hermano de un exdirector de Hacienda puso de relieve la intersección de los delitos financieros y la violencia, así como los altos riesgos asociados con poner al descubierto las redes ilícitas.

## ACTORES CRIMINALES

Componen el panorama criminal de Colombia cuatro grandes grupos de tipo mafioso: el Clan del Golfo, el ELN, el Estado Mayor Central de las FARC (EMC) y la Segunda Marquetalia de las FARC. El Clan del Golfo, la mayor organización criminal del país, opera con una estructura jerárquica, aunque los cambios recientes en su dirigencia han provocado disputas internas. El grupo domina el noroeste de Colombia, donde se dedica al tráfico de drogas, la minería ilegal y el tráfico de personas. A pesar de las negociaciones de paz con el Gobierno colombiano, el ELN mantiene un mando descentralizado y opera a lo largo de la frontera con Venezuela. Las FARC EMC, una facción disidente de los Acuerdos de Paz del 2016,

han ampliado su territorio y se mantienen las negociaciones para un alto el fuego. Sin embargo, las divisiones internas han provocado una fragmentación que limita el alcance de los esfuerzos de paz. La Segunda Marquetalia, otro grupo disidente de las FARC, se sigue dedicando al tráfico de drogas y la extorsión a lo largo de la frontera con Venezuela. Estos grupos ejercen un control territorial considerable y emplean redes criminales locales para imponer su influencia, lo que genera una inestabilidad persistente, a pesar de la iniciativa de Paz Total del Gobierno.

Colombia también alberga numerosas redes criminales más pequeñas, que actúan de forma independiente o al amparo de organizaciones de tipo mafioso más grandes. Algunos grupos, como Los Pelusos, Los Puntilleros, La Oficina de Envigado, Espartanos y Shottas, se especializan en el microtráfico, la extorsión, los asesinatos por encargo y el contrabando. Muchos operan en centros urbanos, donde controlan las redes de distribución de drogas e influyen en la política municipal. En Buenaventura, por ejemplo, Shottas y Espartanos dominan las actividades ilícitas relacionadas con el puerto. Estas redes son muy adaptables y colaboran con socios internacionales para facilitar la exportación de drogas. Debido a la fragmentación del comercio de la cocaína, han adquirido protagonismo algunos grupos más pequeños, que a menudo trabajan con organizaciones de tipo mafioso en un modelo de subcontratación.

La influencia criminal dentro de las instituciones estatales colombianas es un problema que viene de lejos y hay actores infiltrados en muchos niveles del Gobierno. Algunos funcionarios corruptos dentro de la Policía y las Fuerzas Armadas han facilitado el tráfico de drogas y la minería ilegal, proporcionando un apoyo logístico fundamental para las operaciones delictivas. Algunas figuras políticas locales de determinados municipios, así como personas de círculos políticos de alto nivel, tienen vínculos con el crimen organizado y han obtenido ventajas electorales mediante la financiación ilícita. Los recientes esfuerzos para combatir este problema han dado lugar a una reestructuración a gran escala de las fuerzas de seguridad. No obstante, la corrupción arraigada sigue siendo un obstáculo importante para luchar contra el crimen organizado.

Las organizaciones criminales extranjeras, en particular los grupos mexicanos y los venezolanos, desempeñan un papel crucial en las economías ilícitas de Colombia. El Cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación financian y coordinan la producción de cocaína y mantienen fuertes vínculos con actores locales, como el ELN y el Clan del Golfo. A diferencia de los grupos nacionales, estos cárteles mexicanos evitan el control territorial y prefieren actuar como intermediarios en la logística del tráfico de drogas.

Algunas bandas venezolanas, en particular el Tren de Aragua, se han expandido a ciudades colombianas y se han especializado en la trata de personas y la extorsión. Los enfrentamientos con grupos colombianos, sobre todo en Medellín y en las regiones fronterizas, ponen de relieve su creciente influencia. Algunos actores vinculados al Estado venezolano, como el Cártel de los Soles, colaboran con exmiembros de las FARC en operaciones transnacionales de tráfico de drogas. Además, hay grupos brasileños, como el Primeiro Comando da Capital, que facilitan el tráfico de cocaína hacia los mercados internacionales y establecen vínculos con las mafias italianas. Estas influencias extranjeras complican el entorno de seguridad de Colombia y refuerzan el papel del país como centro neurálgico del crimen organizado mundial.

El sector privado desempeña un papel fundamental para facilitar el crimen organizado, especialmente en el lavado de dinero y el control de activos. Algunas industrias, como la construcción, el turismo y la agricultura, proporcionan la infraestructura para los flujos financieros ilícitos. La propiedad de tierras por parte de grupos de tipo mafioso les permite introducir actividades delictivas en los mercados legales y ejercer influencia en las economías locales. Las instituciones financieras y las élites empresariales se han enfrentado a investigaciones por complicidad en el lavado de ganancias procedentes del narcotráfico, aunque la aplicación de la ley sigue siendo desigual. Algunos casos de gran repercusión, como la detención de un empresario del sector pesquero vinculado a los cárteles mexicanos, ponen de relieve la implicación del sector privado en las redes criminales.

# RESILIENCIA

## LIDERAZGO Y GOBERNANZA

El Gobierno de Colombia está llevando a cabo su iniciativa Paz Total, cuyo objetivo es entablar un diálogo con grupos criminales, como las guerrillas y los paramilitares. Sin embargo, su implementación se ha topado con obstáculos, entre ellos la falta de coordinación, el incumplimiento de los altos el fuego y la resistencia del Congreso a las reformas judiciales.

Las investigaciones por corrupción que involucran a altos funcionarios aumentan la desconfianza de la población. Además, que el Gobierno haya cambiado su política en materia de drogas y prefiera la interdicción, en lugar del enjuiciamiento de los cultivadores de coca ha coincidido con la violencia actual y con la persistencia de las actividades del crimen organizado. A pesar de estos esfuerzos, muchas de

estas estructuras criminales siguen siendo actores políticos relevantes, sobre todo a nivel local, y participan activamente en el Congreso, las alcaldías y otras esferas políticas.

El país ha implementado mecanismos de transparencia, pero la corrupción y la impunidad siguen obstaculizando su eficacia. Si bien se han producido pequeñas mejoras en la percepción pública de la corrupción, persiste la preocupación por las propuestas legislativas y porque las estrategias anticorrupción no se han implementado del todo. Colombia aún no ha aplicado la Estrategia Nacional Anticorrupción esbozada en su Plan Nacional de Desarrollo. Esta estrategia incluye medidas para que el público y los periodistas tengan mejor acceso a la información, para mejorar la rendición de cuentas del Gobierno, para reforzar la protección de los testigos y para aumentar la capacidad del Estado para prevenir y castigar la corrupción. Estas deficiencias, combinadas con unos escándalos de corrupción de gran repercusión, también han influido en la percepción de la rendición de cuentas.

Colombia participa activamente en tratados y acuerdos internacionales que abordan la criminalidad transnacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, pero no ha ratificado los protocolos relacionados con el tráfico ilícito de migrantes y el tráfico de armas de fuego. En los últimos años, Colombia ha seguido participando activamente en operaciones transnacionales contra el crimen organizado. El país también mantiene alianzas en materia de seguridad, en particular con Estados Unidos y con otros países de América del Sur, donde la extradición sigue siendo una herramienta en los procesos judiciales contra el crimen organizado. Por ejemplo, en el 2024 se creó un consejo binacional con Ecuador para abordar los delitos ambientales y el crimen organizado en las regiones fronterizas. Ese mismo año, el país también firmó un acuerdo con Brasil para intensificar los esfuerzos contra los delitos transnacionales en la Amazonía, incluidos el tráfico de drogas y la tala ilegal, mediante una mayor presencia militar y operaciones conjuntas. Sin embargo, la corrupción y las filtraciones de información dentro de las instituciones de seguridad plantean retos para la cooperación internacional.

Colombia cuenta con un marco legislativo integral para hacer frente al crimen organizado, que incluye leyes que abarcan ámbitos como la actividad delictiva organizada, el control de las drogas y de las armas de fuego y la protección del medioambiente y también disposiciones que prevén sanciones importantes para los delitos contra el medioambiente. Sin embargo, siguen existiendo algunas lagunas e incoherencias. Por ejemplo, la legislación vigente sobre la trata de personas no se ajusta plenamente a las normas internacionales, ya que omite elementos claves, como la fuerza, el fraude o la coacción. Las leyes actuales tampoco abordan suficientemente la influencia de los grupos delictivos en los procesos políticos, lo que pone de relieve la necesidad de adoptar medidas más enérgicas contra la corrupción y el uso de recursos ilícitos en la política y en el sector privado. Las recientes iniciativas para promover la paz y la desmovilización ofrecen

alternativas al encarcelamiento y tratan de incentivar el abandono de la actividad delictiva, aunque su aplicación se enfrenta a retos constantes.

## JUSTICIA PENAL Y SEGURIDAD

El sistema judicial colombiano sigue enfrentando desafíos en la lucha contra el crimen organizado. Si bien la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha tramitado casos de gran repercusión, persisten la corrupción y las ineficiencias institucionales. Se conocen casos de corrupción judicial y algunos grupos del crimen organizado han operado desde el interior de los centros de detención. El hacinamiento y las condiciones de detención también se han identificado como motivos de preocupación, a pesar de las reformas institucionales en curso.

Las actuaciones de los cuerpos de seguridad contra el crimen organizado se han visto afectadas por la corrupción interna y por consideraciones políticas. Las unidades especializadas se centran en el tráfico de drogas, el lavado de dinero y otras actividades ilícitas, pero su eficacia se ha reducido, debido a los escándalos internos. Los altos el fuego en el marco de la iniciativa Paz Total han afectado las estrategias de los cuerpos de seguridad y algunos informes apuntan a la existencia de vínculos entre la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad y las redes de trata de personas.

La integridad territorial de Colombia está condicionada por la existencia de unas fronteras porosas con Venezuela, Ecuador, Perú y Brasil, que facilitan las actividades ilícitas transfronterizas. Los grupos armados siguen operando en las regiones limítrofes, en ocasiones en colaboración con actores extranjeros. La limitada presencia del Estado en las zonas rurales y fronterizas ha permitido que el crimen organizado ejerza su influencia, lo que ha afectado especialmente a las comunidades indígenas y a las afrocolombianas. Las limitaciones de las infraestructuras de seguridad siguen siendo un factor que expone a Colombia a las actividades delictivas transnacionales.

## ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO

Colombia ha puesto en práctica algunas medidas para ajustar su política de lucha contra el lavado de dinero a las normas del Grupo de Acción Financiera. Se ha ampliado la lucha contra los delitos financieros, especialmente en lo que respecta a las transacciones con criptomonedas y los flujos financieros ilícitos transfronterizos. Sin embargo, las entidades colombianas todavía utilizan el sistema financiero de Panamá para el lavado de dinero y algunas estructuras empresariales siguen siendo vulnerables a la explotación. La cooperación internacional en materia de lucha contra el lavado de dinero ha mejorado, pero los resultados de la aplicación de la ley a nivel nacional han sido variables, especialmente en algunos casos de delitos financieros de gran repercusión.

Las organizaciones criminales siguen estando presentes en sectores económicos como la construcción, el transporte y el entretenimiento. Las redes de lavado de dinero han tenido repercusiones en los mercados financieros, lo que ha dado lugar a retos normativos. En algunas regiones continúan las actividades económicas informales, como los préstamos a intereses altos. En las zonas rurales, las organizaciones criminales controlan las economías locales a través de modelos de gobernanza alternativos.

## SOCIEDAD CIVIL Y PROTECCIÓN SOCIAL

Los sistemas de apoyo a víctimas y testigos de Colombia han encontrado dificultades, sobre todo en la Unidad Nacional de Protección, que ha sido acusada de corrupción y de ineficiencias operativas. Algunos testigos claves en causas penales han sido objeto de ataques. Existen marcos jurídicos para proteger a las víctimas y para indemnizarlas, pero su aplicación ha sido desigual. En las zonas rurales, las comunidades suelen mostrarse reacias a denunciar los delitos, porque perciben vínculos entre los grupos delictivos y los cuerpos de seguridad. Para los consumidores de drogas, el país está elaborando un plan de acción centrado en la reducción de daños, un mejor acceso a la atención y el tratamiento y la inclusión social, para hacer frente a los efectos negativos del consumo de drogas. Su aplicación y sus efectos aún están por verse.

Las estrategias de prevención del delito incluyen programas de seguridad e intervención, pero los enfoques militarizados han influido en su aplicación, eclipsando las medidas de prevención

más suaves. Por ejemplo, los programas de sustitución de cultivos, destinados a reducir el cultivo de plantas para la producción de drogas, están perdiendo impulso. También se ha tratado de implementar estrategias de prevención no policiales, que incluyan enfoques experimentales destinados a frenar la gobernanza criminal. Los gobiernos locales han desarrollado modelos alternativos de actuación policial, mientras que las políticas nacionales de prevención siguen en fase de desarrollo. La adopción de una estrategia de «seguridad humana» ha introducido un espacio adicional para iniciativas centradas en la prevención, aunque los niveles de implementación varían.

Los medios de comunicación independientes y las organizaciones de la sociedad civil siguen informando sobre cuestiones relacionadas con la corrupción y los derechos humanos. Sin embargo, los periodistas y los activistas han sido amenazados y han sufrido violencia, especialmente cuando informan sobre el crimen organizado. Las comunidades indígenas y las afrocolombianas han denunciado problemas de seguridad. Las organizaciones de la sociedad civil siguen activas, pero la violencia selectiva ha afectado su capacidad operativa.

---

*Este resumen ha sido financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las opiniones, los hallazgos y las conclusiones expresados en este documento pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan los del Departamento de Estado de los Estados Unidos.*